



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-002-2021-00452-01 (O2-23-028)
Accionante: MARIA OLIVA BEDOYA DE MONTOYA
Accionada: COLPENSIONES E.I.C.E.
Procedencia: JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No. 181
Asunto: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES – CÓNYUGE SUPÉRSTITE

En Medellín, a los catorce (14) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-002-2021-00452-01 (O2-23-028), instaurado por MARIA OLIVA BEDOYA DE MONTOYA, en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., con el fin de resolver el recurso de apelación que fuera propuesto por COLPENSIONES E.I.C.E. así como el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de la entidad de seguridad social accionada, respecto de la sentencia que fulminó la primera instancia, proferida el 25 de enero de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

La señora MARÍA OLIVA BEDOYA DE MONTOYA actuando a través de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., en procura de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con ocasión del deceso de su

cónyuge, el señor Darío de Jesús Montoya Montoya, el pasado 30 de diciembre de 2020, junto con los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas.

En respaldo de sus aspiraciones señaló que contrajo matrimonio con el señor Darío de Jesús Montoya Montoya el 07 de agosto de 1971 y que fruto de dicha unión nacieron sus hijos Wilson Darío Montoya Bedoya, John Edison Montoya Bedoya, Diego Mauricio Montoya Bedoya y Carlos Augusto Montoya Bedoya, quienes actualmente son sujetos mayores de edad, capaces e independientes. Informó que desde el momento en que se casó con el señor Montoya Montoya, convivieron de manera continua hasta el momento de la muerte de este, la que, valga decir, acaeció el 30 de diciembre de 2021, sin que se presentara separación de bienes ni liquidación de la sociedad conyugal.

Relató que, dependía económicamente del causante, al punto que, el Juzgado Catorce Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín ordenó el reconocimiento del incremento pensional del 14% sobre la pensión mínima legal, en la acción ordinaria bajo el RUN 05001-41-05-003-2014-00219-00. Finalmente, adujo que reclamó el reconocimiento de la prestación económica ante la administradora del RPMPD, misma que en resolución SUB89404 del 13 de abril de 2021 negó el derecho pensional, bajo el argumento de no haber acreditado la convivencia mínima exigida.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 22 de noviembre de 2021 (doc.06, carp.01), y se notificó a la demandada el 17 de marzo de 2022 (doc.07, carp.01), empero, la administradora convidada a juicio NO brindo respuesta oportuna al libelo gestor (doc.14, carp.01.)

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 25 de enero de 2023 (docs.25 y 26, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió reconocer la prestación pensional solicitada por la señora BEDOYA DE MONTOYA, pago que dispuso debería efectuarse a partir del 30 de diciembre de 2020, en cuantía igual a un salario mínimo legal mensual vigente, junto con los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 (minuto 46:23 a 01:04:20, doc.26, carp.01).

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado, a grandes líneas coligió que a la cónyuge supérstite de un pensionado le basta acreditar que convivió con el causante por un

lapso no inferior a 5 años en cualquier tiempo; presupuesto que encontró probado en el *sub litum* con las probanzas adosadas al acervo probatorio.

1.3. Recurso de Apelación

La procuradora judicial de COLPENSIONES E.I.C.E. se mostró en desacuerdo con la decisión adoptada por el *a quo*, solicitando se mantenga indemne a su representada de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra por parte de la señora BEDOYA DE MONTOYA.

Con tal propósito recordó que, conforme con las resultas de la investigación administrativa que practicó y a juzgar por el mérito probatorio de la prueba testimonial recaudada, la parte actora no allegó soporte acreditativo que dé cuenta de la convivencia de la pareja por el periodo exigido por la norma (minuto 1:04:24 a 01:06:13, doc.26, carp.01).

1.4. Grado Jurisdiccional de Consulta

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses COLPENSIONES E.I.C.E., la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta, en favor de la antedicha entidad, en los puntos en que no fue objeto de alzada.

1.5. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta fueron admitidos el 06 de febrero de 2023 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 20 siguiente (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, ejercieran su derecho a la presentación de las alegaciones de conclusión por escrito, de considerarlo del caso. En este orden, la parte actora solicita se mantenga la decisión criticada (doc.04, carp.02), puesto que, contrario a lo expuesto por la accionada, la señora MARÍA OLIVIA BEDOYA DE MONTOYA demostró haber convivido con el señor Darío de Jesús Montoya Montoya, desde la fecha en que celebraron su matrimonio (07-ago-1971) y hasta la fecha del óbito (30-dic-2020); mientras que, COLPENSIONES E.I.C.E. guardó silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES E.I.C.E., advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo

66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada se focalizará en los puntos de inconformidad materia de alzada, al igual que se examinará en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad pública, en los puntos que no fueron objeto de disenso.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si la señora MARIA OLIVA BEDOYA DE MONTOYA reúne los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el señor Darío de Jesús Montoya Montoya (q.e.p.d.), en calidad de cónyuge supérstite. En caso afirmativo, la Sala elucidará la fecha de causación, y si procede el pago de los intereses moratorios.

2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala

El sentido del fallo de esta Corporación será **CONFIRMATORIO**, con basamento en que le asiste derecho a la actora a la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite ante el fallecimiento del *de cujus* Darío Montoya Montoya (q.e.p.d.), al acreditar los cinco años en cualquier tiempo, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

2.3. Pensión de sobrevivientes- fallecimiento. Previo a resolver los problemas jurídicos, lo primero que debemos advertir es que el fallecimiento del señor Darío Montoya Montoya, se encuentra acreditado con el registro de defunción con indicativo serial núm. 4995189, el cual precisa que la fecha del deceso tuvo lugar el 30 de diciembre de 2020 (pág.13 y 14, doc.05, carp.01).

2.4 Normatividad aplicable. Resulta oportuno recordar que, en materia de pensión de sobrevivientes, la norma aplicable es justamente aquella que se encontraba vigente al momento en que ocurrió el deceso del afiliado o pensionado, que para este caso no es otra que los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por la Ley 797 de 2003, dado que el óbito se produjo el 30 de diciembre de 2020 (Criterio expuesto por nuestra CSJ en la sentencia SL 701-2020).

2.5 Calidad de pensionado y causación de la prestación. Del contenido en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, dispone que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez fallecido. En el *sub studium*, se tiene que el extinto Instituto de Seguros Sociales a través de la Resolución nro. 014284 de 2009, reconoció la pensión de

invalidez al señor Darío de Jesús Montoya Montoya, a partir del 17-mar-2008 y en cuantía inicial de un salario mínimo legal mensual vigente (págs.143 a 144, doc.24, carp.01); prestación pensional que, a partir del 1° de octubre de 2015, fue sustituida a una pensión de vejez en Resolución GNR297927 del 28-sep-2015 (doc. GRF-AAT-RP-2015_9684817-20151009034606.pdf; subcarp.19, carp.01)

2.6 Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. El numeral 1° del art. 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 12 de la Ley 797 del 2003, establece que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca.

2.7 Requisitos de la pensión de sobrevivientes. Acreditado como está, que el fallecido sí dejó causado el derecho para que sus posibles beneficiarios puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, conviene resaltar el contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, atinente a quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, entre otros, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstites, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha de fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad y 5 años de convivencia en los últimos 5 años, independientemente de si el *“causante de la prestación es un afiliado o un pensionado”* (SU149-2021).

Siendo conveniente acotar en este punto, que si bien la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1730-2020, rectificó el criterio de exigencia del requisito de convivencia a la cónyuge o compañera permanente cuando el causante fuera un afiliado fallecido, en el sentido de exigirles únicamente la acreditación de tal condición a la fecha del deceso, lo cierto es que mediante sentencia SU 149 de 2021 la Corte Constitucional dejó sin efectos tal decisión y le ordenó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitir una nueva sentencia *“(…) en la cual observe el precedente adoptado por la Corte Constitucional, en el sentido de que, en los términos del artículo 47, literal a) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la convivencia mínima requerida para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para el cónyuge como para el compañero o la compañera permanente, es de cinco (5) años, independientemente de si el causante de la prestación es un afiliado o un pensionado”*, de lo cual resulta diáfano que sobre el punto, el único criterio vigente corresponde a la exigencia del requisito de convivencia, tratándose de pensionado, bien de afiliado fallecido.

De esta manera, la Sala siguiendo el precedente de la Corte Constitucional al respecto, verificará el requisito de la convivencia en el lapso de cinco años por tratarse de cónyuge superstite de afiliado.

2.8 Derecho reclamado por la señora María Oliva Bedoya de Montoya

2.8.1 Edad. Con relación al primer requisito no existe reparo alguno, puesto que la señora MARÍA OLIVA BEDOYA DE MONTOYA nació el 30 de julio de 1952, según da fe la copia de su cédula de ciudadanía (pág.83, doc.05, carp.01), luego para la muerte del señor Darío Montoya contaba con 68 años cumplidos, punto que no fue objeto de controversia por la pasiva.

2.8.2 Calidad de cónyuge superstite. Como se anunció, para tener derecho a la pensión de sobrevivientes la cónyuge debe acreditar dicha calidad a la fecha del óbito, presupuesto que en efecto se encuentra demostrado en el caso analizado, en tanto que la señora MARÍA OLIVA BEDOYA DE MONTOYA contrajo matrimonio con el señor Darío Montoya el 07 de agosto de 1971 (pág.03, doc.05, carp.01), sin que aparezca anotación alguna que indique marginalmente modificaciones al estado registrado.

2.8.3 Prueba de la convivencia de la cónyuge superstite. Este requisito constituye en punto nodal de la controversia, pues una vez se presentó la señora MARÍA OLIVA BEDOYA DE MONTOYA, en calidad de cónyuge superstite a reclamar la pensión de sobrevivientes ante COLPENSIONES, dicha entidad mediante resolución SUB89404 del 13 de abril de 2021 (págs.61 a 65, doc.05, carp.01) le negó la prestación, esgrimiendo que no se cumplió el requisito contemplado en el literal b del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

De otro lado, valga señalar que, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la SL2318 de 2023, afincó que: *“ha entendido por convivencia, aquella comunidad de vida forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, «que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado» (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245, SL, 14 jun. 2011, rad. 31605 y SL1399-2018).*

De forma que, en el *sub examine* el apoderado judicial de la parte actora, sobre el punto resalta que la convivencia inició desde el 07 de agosto de 1971, cuando contrajeron matrimonio y se mantuvo hasta el óbito del señor MARIO CORREA (30-dioc-2020), y para ello trae al cartulario

las testificales de María Rocío Suárez Rojas y John Edinson Montoya Bedoya; a su vez, que la entidad encartada insiste en que no se logra demostrar la convivencia.

Así, la señora María Rocío Suárez Rojas narró que conoció a la demandante hace 40 años, pues eran vecinas en el barrio Naranjitos del corregimiento San Antonio de Prado – Antioquia y allí conoció también al esposo de aquella, señor Darío Montoya Montoya. Por ello sabe y le consta que tenían 4 hijos, a quienes identificó con los nombres de Wilson Darío, John Edinson Mauricio y Carlos, cohabitando todos en la misma casa. Aseveró que todo el tiempo que conoció a la pareja, nunca se separaron y siempre vivieron juntos en el mismo inmueble; destacando que la señora MARÍA OLIVA BEDOYA es ama de casa y era el causante quien se encontraba a cargo de los gastos familiares. Relata que luego de la muerte del señor Darío Montoya, la accionante vive sola en la misma casa, la que adujo, constaba de dos piezas una sala y la cocina.

En derredor a la muerte del señor Darío Montoya, aseveró que fue internado en la clínica Antioquia por un lapso de 10 días, permaneciendo siempre en compañía de la demandante, que finalmente falleció de un paro respiratorio y que las exequias y la cremación fueron llevadas a cabo en el corregimiento de San Antonio de Prado.

El señor John Edinson Montoya Bedoya afirmó que es hijo de la pareja conformada por la pretensora y el señor Darío Montoya Montoya, asegurando que aquellos siempre convivieron en la casa ubicada en el barrio Los Naranjitos en el corregimiento de San Antonio de Prado. Así también negó categóricamente alguna separación durante todo el tiempo que sus padres convivieron juntos, como se consignara en la investigación administrativa desarrollada por COLPENSIONES E.I.C.E.

Resaltó que su hermano Carlos Augusto actualmente vive con su madre en la misma casa, que esta era ama de casa y era quien acompañaba a su padre a todos los controles y citas médicas que le programaban.

A su turno, obra en el plenario las declaraciones extraproceso rendidas por María Rocío Suarez Rojas, Alberto Monsalve Velásquez, John Edinson Montoya Bedoya y Diego Mauricio Montoya Bedoya (págs.440 a 441, doc.24, carp.01; págs.84 a 85, doc.05, carp.01) ante el Notario Único del círculo de La Estrella - Antioquia, quienes de consuno sostuvieron que conocieron al señor Darío de Jesús Montoya Montoya con quien, los dos primeros mantuvieron un vínculo de amistad por razón de ser vecinos y los últimos por ser sus hijos, por lo que afirmaron que contrajo matrimonio con la señora MARÍA OLIVA BEDOYA DE MONTOYA, que convivieron

desde que se casaron y hasta el deceso del señor Montoya el pasado mes de diciembre del año 2020.

Ahora, del análisis conjunto de los elementos de prueba descritos, a más de lo reflejado en los elementos ya analizados, se aprecia que los referidos testimonios merecen plena credibilidad, en tanto en cuanto provienen de personas con suficiente cercanía a la accionante como para conocer los detalles de su vida familiar, no se avizora incoherencias o contradicciones entre sus dichos, ni con las demás pruebas obrantes en el expediente, v. gr. las declaraciones extraproceso acopiadas al diligenciamiento judicial, junto con el material fotográfico y la historia clínica que da cuenta que, era la actora quien acompañaba al causante a las valoraciones médicas (págs.28 a 60, doc.05, carp.01); tampoco se tienen razones para considerar que les asiste algún interés directo en el resultado del proceso. A ello hay que adicionar que, en sentencia del 30 de abril de 2015, el Juzgado Catorce Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, encontró acreditado que la señora MARÍA OLIVA BEDOYA DE MONTOYA dependía económicamente del aquí causante, conforme con las pruebas regular y oportunamente arrimadas a la controversia, puntualmente los testimonios de los señores María Rocío Suárez Rojas y María Enedina López Arroya, quienes informaron que *“...la señora MARÍA OLIVA BEDOYA DE MONTOYA es amada de casa, que convive con el señor Darío de Jesús Montoya Montoya, que nunca se han llegado a separar, que de esta unión procrearon cuatro hijos, quienes no le colaboran económicamente a su madre, que la señora Bedoya de Montoya, no realiza alguna actividad que le genere ingresos, no tiene bienes que le produzcan renta y que tampoco ha recibido herencias o donaciones, razón por la cual depende para sus sostenimiento de su esposo, quien es el encargado de proporcionarle todo para su manutención”* (págs.88 a 102, doc.24, carp.01).

Dilucidado lo anterior, vale señalar que las argumentaciones realizadas y que sustentan la decisión de Colpensiones, están fundadas en que la actora no es beneficiaria de la prestación económica por no contar con el requisito de la convivencia hasta el óbito del señor Darío Montoya, tesis que como quedó ampliamente esbozado, no tiene asidero suficiente, puesto que la cónyuge separada de hecho puede ser beneficiaria de la prestación si demuestra una convivencia de cinco (5) años en cualquier tiempo, requisito que se encuentra plenamente acreditado por la actora, pues basta con recordar que la totalidad de la prueba testimonial es conteste en cuanto al hecho de que la pareja permaneció conviviendo desde que contrajeron matrimonio (07-agos-1971) hasta el deceso señor Montoya Montoya (30-doc-2020) periodo asaz superior a los cinco años en cualquier tiempo, exigido para causar el derecho pensional.

Ello así, al aplicarse los criterios de la sana crítica en racional y libre persuasión en términos del artículo 61 del CPT y de la SS, se extrae que con el acervo probatorio recaudado se logra

acreditar que MARÍA OLIVA BEDPOYA DE MONTOYA convivió en calidad de cónyuge con el *de cujus* por espacio superior a los cinco (5) años en cualquier tiempo, a más de que se mantuvo vigente el vínculo matrimonial hasta la muerte del señor Darío de Jesús Montoya Montoya.

La Corte, recientemente en sentencias CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017 y CSJ SL6519-2017, reiterada en decisiones CSJ SL1227 de 2023, a propósito de la causación y titularidad del derecho a la pensión de sobreviviente en la situación del cónyuge con vínculo matrimonial vigente, indistintamente se halle o no separado de hecho, aquilató:

Entonces la convivencia de 5 años con el cónyuge con lazo matrimonial vigente, puede darse en cualquier tiempo, así no se verifique una comunidad de vida al momento de la muerte del (la) afiliado (a) o pensionado (a), dado que: (i) el legislador de 2003 tuvo en mente la situación de un grupo social, integrado a más de las veces por mujeres cuyos trabajos históricamente han sido relegados al cuidado del hogar y que, por consiguiente, podían quedar en estado de vulnerabilidad o inminente miseria ante el abandono de su consorte y su posterior deceso; (ii) esta dimensión sociológica debe servir de parámetro interpretativo, a modo de un reconocimiento que la seguridad social hace a la pareja que durante largo periodo contribuyó a la consolidación de la pensión, mediante un trabajo que hasta hace poco no gozaba de valor económico o relevancia social; y (iii) es lógico pensar que si con arreglo al último inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en los eventos de convivencia no simultánea, el cónyuge separado de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en forma compartida, también debe tener derecho a esa prestación ante la inexistencia de compañero (a) permanente. Por otra parte, la Corte ha clarificado que el referente que le permite al cónyuge separado de hecho o de cuerpos acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial.

Visto lo anterior, le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes a la señora **MARÍA OLIVA BEDOYA DE MONTOYA** como cónyuge supérstite, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, mientras que, en lo que respecta a la cuantía de la sustitución pensional por causa de muerte, tal y como lo sentenció el *a quo* el artículo 48 del compendio del SGSS, de manera diáfana y sin lugar a interpretación distinta, establece que “[e]l monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba”, mandato que cobra sentido bajo el supuesto que “«la sustitución pensional no constituye un derecho originario sino derivado», cuyas condiciones de causación forman elementos arraigados del derecho principal”, como lo adocrinó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en providencias SL3168 de 2018, SL2597 de 2021 y SL875 y SL1830 ambas de 2022.

2.9 Prescripción. En cuanto a la excepción de prescripción, tenemos que la obligación se hizo exigible a partir del 30 de diciembre de 2020 con el deceso del señor Darío Montoya Montoya (pág.13, doc.05, carp.01), la reclamación administrativa se presentó el 25 de febrero de 2021, que fue resuelta a través de Resolución SUB89404 del 13 de abril de esa misma anualidad (págs.61 a 65, doc.05, carp.01), a partir de allí debía accionar por vía judicial el reconocimiento

pensional, lo cual se hizo el 02 de noviembre de 2021 (doc.01, carp.01), es decir, no corrieron más de los 3 años entre la resolución que resolvió la reclamación administrativa y la presentación de la demanda, por lo que ha de concluirse que no operó el fenómeno prescriptivo.

2.10 Intereses moratorios. El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago, intereses que (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por la aplicación de reglas jurisprudenciales (CSJ SL1019 del 03-03-2021, Radicado 86195).

Al respecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que la causación de dichos intereses opera de manera automática cuando hecha la reclamación de la prestación, no se otorga dentro de los plazos establecidos por las disposiciones legales (CSJ SL-14693 del 23- 08-2017, Radicado 46590; SL-4192 del 11-07-2018, Radicado 64180, SL-2149 del 03- 04-2019, Radicado 60456, SL-4980 del 13-11-2019; SL-841 del 11-03-2020, Radicado 80192SL-2662 del 17-06-2020, Radicado 50231).

Adicionalmente, la Alta Corporación memoró que no era admisible sostener que el pensionado únicamente sufría un daño económico al no recibir suma alguna por concepto de mesada pensional, pues teniendo en cuenta que la pensión es un derecho íntimamente relacionado con el mínimo vital, además de que su cuantía está fijada legalmente y tiene una relación de correspondencia con los aportes al sistema, todo pago imperfecto, insustancial o incompleto seguirá generando un deterioro cierto, que merece a todas luces una legítima compensación, y en ese sentido, resaltó la obligación constitucional y legal de las entidades administradoras de pensiones en no sólo pagar de manera oportuna las pensiones de sus afiliados, sino en pagarlas de manera íntegra, cabal y completa, pues de lo contrario, se harán merecedoras a la imposición de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL-1681 del 03-06-2020, Radicado 75127; SL-3130 del 19-08-2020, Radicado 66868; SL-84820 del 10-02-2021, Radicado 84820, SL-1019 del 03-03-2021, Radicado 86195; SL-1727 del 14-04-2021, Radicado 75173).

Desde ese horizonte, la Sala advierte que COLPENSIONES E.I.C.E. se abstuvo de reconocer la pensión de sobrevivientes con fundamento en la falta de acreditación del presupuesto de la convivencia, hipótesis que no se adecúa a los supuestos fácticos de los que se hizo alusión en el punto inmediatamente anterior, resultando por tanto procedente los intereses moratorios materia de condena por el fallador de instancia a partir de la fecha en la cual se cumplió el término de dos (2) meses con el que contaba la administradora para el reconocimiento pensional¹, como con tino lo determinó el juzgador unipersonal de primer grado.

Como colofón de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fácticas, jurídicas y probatorias explicitadas con suficiencia, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia de primer grado, en cuanto condenó a COLPENSIONES E.I.C.E. a reconocer en favor de la señora MARÍA OLIVA BEDOYA DE MONTOYA la pensión de sobrevivientes con ocasión al deceso de su cónyuge Darío de Jesús Montoya Montoya, junto con los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

3. Costas. En segunda instancia no se impondrá condena en costas, ya que la sentencia se revisó en su integridad en el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones. Las de primera instancia se confirman.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el 25 de enero de 2023, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL impulsado por MARÍA OLIVA BEDOYA DE MONTOYA, en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., según y conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, prohijando el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

¹ Ley 717 de 2001. **Artículo 1o.** El reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario